

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El trece (13) de abril de dos mil veintitres (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **BLANCA LUCIA RAMÍREZ ALARCÓN** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES) y la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** (en adelante PROTECCIÓN S.A), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-022-2018-00542-01.

AUTO

De conformidad con el memorial de sustitución de poder, allegado vía correo electrónico junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia por parte de la sociedad RST ASOCIADOS quien representa judicialmente los intereses de Colpensiones en este proceso, se procede a reconocer personería a la abogada SARA BOTERO GARCIA portadora de la T.P. 340.780 del C. S. de la Judicatura, para que represente a COLPENSIONES en este proceso como apoderada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos,

1. ANTECEDENTES:

La demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la ineficacia de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata la actora, que se nació el 08 de marzo de 1961, y que se afilío al ISS para el cubrimiento de los riesgos de vejez,

invalidez y muerte a partir del mes de agosto de 1980 y posteriormente el 21 de junio de 1995 suscribió formulario de traslado y/o afiliación al fondo de pensiones de obligatorio PROTECCIÓN S.A.

Manifiesta que realizó la solicitud de vinculación y/o afiliación a PROTECCIÓN S.A., con la firme convicción de que accedería al derecho pensional en los términos ofrecidos por el fondo privado; el ejecutivo comercial le manifestó que en el fondo privado podría pensionarse de manera anticipada, pero le omitieron especificar las condiciones de dicha pensión anticipada.

Aduce que en dicha asesoría no le hicieron énfasis en temas técnicos y determinantes en la construcción de la pensión en el RAIS, tales como que la mesada pensional depende del capital ahorrado en la cuenta de ahorro individual, compuesto por los aportes, los rendimientos generados y el bono pensional. No le explicaron que si quería pensionarse de manera anticipada debía negociar el bono pensional en la bolsa de valores, tampoco se le puntualizó que la mesada pensional estaba sujeta a las fluctuaciones, a la volatilidad del mercado público de valores y a factores actuariales y financieros.

Arguye que elevó ante COLPENSIONES, solicitud de traslado a dicha administradora, misma que le fue denegada el día 27 de agosto de 2018.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

El *a quo* despachó favorablemente las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia del traslado la ineficacia del traslado que hizo la demandante el agosto 9 del año 2001 desde el RPM al RAIS a la AFP SANTANDER hoy AFP PROTECCIÓN y dispuso que la parte actora ha estado vinculada, sin solución de continuidad en el RPM y condenó a COLPENSIONES como actual administradora de ese régimen a tener a la parte demandante como su afiliada y a consolidar en la historia pensional de ella todo el tiempo servido o cotizado al SGP sólo en RPM.

En consecuencia ordenó a la AFP PROTECCIÓN S.A., a trasladar a COLPENSIONES, como administradora del RPM todo aporte que haya realizado por la actora o en su favor que incluya los saldos de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos y todo concepto denominado cuota o gasto de administración. Seguidamente condenó a COLPENSIONES a recibir y/o a cobrar esos dineros.

Para fulminar condena, el *a quo* argumentó que la Corte Suprema de Justicia tiene fijada una línea jurisprudencial sobre el tema de la afiliación a un régimen pensional que se sintetiza en la obligación de brindar una información completa, suficiente, idónea y comprensible sobre las características de los regímenes, determinando e informando la conveniencia e inconveniencia de uno y otro régimen y la carga de las AFP de demostrar que efectivamente entregó la debida información al afiliado al momento del traslado.

Seguidamente expuso que en el presente proceso no se probó por parte de la AFP demandada que haya cumplido con su deber legal de otorgar una explicación integral sobre la regulación de los regímenes pensionales, las ventajas y desventajas, resultando insuficiente como prueba de la existencia de ese consentimiento informado la suscripción del formulario de afiliación, por lo que consideró que existe mérito para acceder a las pretensiones y declarar la ineficacia del traslado de la demandante a PROTECCIÓN S.A en el año 1995.

Finalmente declaró no probadas las excepciones de fondo propuestas por COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. Así mismo señaló que las costas serán asumidas por PROTECCIÓN S.A. para lo cual se fijó las agencias en derecho a favor de la demandante y absolvió de las mismas a COLPENSIONES.

3. DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN:

La sentencia fue apelada por los apoderados de PROTECCIÓN S.A. y de COLPENSIONES.

APELACIÓN DE PROTECCIÓN S.A.

PROTECCIÓN S.A. apela parcialmente el fallo de primera instancia, en lo referente a la devolución de los gastos de administración que han sido descontados durante todo el tiempo que la accionante ha estado afiliada a PROTECCIÓN S.A., porque PROTECCIÓN S.A. ha realizado las deducciones en razón a las disposiciones legales y que son aplicables actualmente, contenidas en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, indica que al respecto, la cuenta de ahorro individual ha sido administrada de forma correcta y oportuna pese a las consecuencias de la declaratoria de ineficacia, de retrotraer las actuaciones a su estado inicial, pero considera que la realidad fáctica es que existe una cuenta de ahorro individual que PROTECCIÓN S.A. ha administrado de forma correcta y oportuna como se puede evidenciar en los óptimos rendimientos a lo largo del tiempo que la accionante ha estado afiliada a PROTECCIÓN S.A., y ello

a hecho que su patrimonio en términos pensionales haya incrementado de manera significativa, ello es muestra de que la cuenta de ahorro individual no ha sufrido ningún deterioro bajo la administración de PROTECCIÓN S.A.

Aduce que no es justo y que no es posible devolver a la entidad del régimen público un porcentaje sobre administración a una entidad que no ha administrado la cuenta de ahorro de individual de la demandante por más de 25 años, y en ese sentido considera que devolver dichos dineros, incluso con cargo al patrimonio de PROTECCIÓN S.A. generaría de manera directa un detrimento a la misma y un enriquecimiento si causa de manera indirecta en favor de la accionante y de manera directa en favor de COLPENSIONES.

Manifiesta que si la demandante hubiera estado desde un inicio en el RPM, por la dinámica del funcionamiento de ambas entidades no hubiera sido posible que la misma obtuviera los rendimientos que obtuvo en el RAIS, reitera que la realidad fáctica es que PROTECCIÓN S.A. ha cumplido a cabalidad con el contrato de seguridad social suscrito con la accionante y los dineros depositados en la cuenta de ahorro individual en vez de sufrir un detrimento, han obtenido unos rendimientos significativos y han aumentado su capital en términos pensionales y por ello considera que no deben devolverse los gastos de administración al RPM.

APELACIÓN DE COLPENSIONES.

COLPENSIONES apela de manera parcial ante el fallo de primera instancia, respecto a la obligación que se le impuso de recibir a la afiliada sin considerar las implicaciones económicas y administrativas que la providencia representa para COLPENSIONES.

Aduce que la voluntad de la parte actora de poder migrar de un régimen a otro, fue un derecho que ejerció al momento de la afiliación al RAIS, hecho que es ajeno a COLPENSIONES y que se contempla en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003 en su literal e, resticción que tiene sentido porque COLPENSIONES no ha establecido un capital para el debido reconocimiento y pago de una pensión en el futuro.

Aduce que en los eventos de traslados de régimen pensional, la jurisprudencia de la CSJ sin atender a las situaciones particulares de cada caso, invierte la carga de la prueba en cabeza del fondo privado y exime al demandante de probar la existencia de un vicio en el consentimiento al momento de afiliarse al RAIS, obligando a que toda la carga de la prueba recaiga exclusivamente en cabeza de los fondos de pensiones, sin que exista menor esfuerzo procesal en cabeza de los demandantes, exigencia

probatoria que no puede ser acreditada por los fondos en razón a que cuentan únicamente con formularios de afiliación, conllevando a que los fallos judiciales en la actualidad se expidan en contra de los fondos privados y de manera colateral en contra de COLPENSIONES.

Arguye que la demandante también tiene obligaciones que implican la aceptación de efectos legales, costos y restricciones derivadas de esta, ya que el Decreto 2555 de 2010 establece el régimen de protección al consumidor financiero y en su artículo 2.6.10.1.4 se determinan las obligaciones que deben atender los afiliados que pertenecen al Sistema General de Pensiones, y dentro de las providencias se puede establecer que se deja a un lado el precedente constitucional al valerse de manera generalizada de la presunta ignorancia de la Ley por parte de los afiliados, para considerarlos como la parte débil y en consecuencia como legos o inexpertos, desconociendo que el error de derecho no es justificable en los negocios jurídicos y menos para buscar un aprovechamiento pensional como el que se puede evidenciar en presente proceso; posición asumida desde la CSJ y sus diferentes manifestaciones.

Por los argumentos expuestos solicita al Tribunal que se revoque la sentencia de primera instancia, y en su lugar se absuelva a COLPENSIONES de todas las pretensiones incoadas en su contra y que la situación pensional de la actora sea resuelta bajo las condiciones del RAIS.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, el apoderado judicial de COLPENSIONES allegó escrito de alegatos, en los que señaló resumidamente que no es procedente imponerle la carga a COLPENSIONES, de recibir y pensionar a afiliados que en muchos años anteriores deciden libre y voluntariamente cambiar de régimen y fondo pensional; y solo cuando están próximos a pensionarse deciden indagar, realizar comparaciones y querer cambiar de régimen, pues el demandante decidió elevar su solicitud de traslado cuando ya estaba próximo a pensionarse y que además no cotizó al régimen de prima media por más de 20 años, por tal razón, sus cotizaciones durante la mayoría de su vida laboral las realizó en un fondo privado.

Es de anotar que la demandante supera la edad permitida para trasladarse de régimen, lo cual deriva en la prohibición de traslado consagrada en el art 2 de la ley 797 de 2003, el cual modificó el literal E del artículo 13 de la ley 100 de 1993.

“Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”.

Es preciso insistir en que la carga de la prueba no debe tornarse netamente a los fondos de pensiones, pues es claro que la afiliación al régimen de ahorro individual fue un negocio jurídico que involucro el consentimiento de dos voluntades y en dos casos diferentes, por tanto no se debe habilitar en este tipo de procesos, que el afiliado adopte una actitud totalmente pasiva durante una gran variedad de años, y con el derecho ya adquirido o a unos años de adquirirlo decida cambiarse de régimen , cuando siempre estuvo a su alcance tuvo y contó con las diferentes herramientas que ofrecen los fondos para adquirir información respecto al estado de su ahorro pensional.

En el proceso se demostró que la demandante realizó conductas tales como: cambiar a un fondo privado, realizar aportes, permanecer en el fondo privado y esperar pensionarse en ese fondo, tales actos nos llevan indudablemente a presumir su voluntad de pertenecer al régimen de ahorro individual.

De igual forma si el Tribunal establece que proceden las pretensiones del demandante, solicito se confirme la sentencia de primera instancia en cuanto a CONDENAR PROTECCION S.A como actual administradora de los recursos pensionales de la parte actora a trasladar al RSPMPD todos los valores de la cuenta de ahorro individual de la parte actora que incluyan además de los aportes concretamente destinados a la CAI, los rendimientos. Y también se CONDENA a PROTECCIÓN a devolver, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de este fallo, de su propio peculio y debidamente indexados, los valores de los aportes pensionales que recibieron de la parte accionante o en su favor destinados a cuotas o gastos de administración del artículo 20 de la Ley 100 de 1993.

5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

El problema jurídico a resolver se circunscribe a establecer si la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es ineficaz y de serlo, en qué términos y condiciones se debe realizar el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por la demandante.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo

dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelacion de PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES se consultará la sentencia en favor de esta ultima por haberle resultado adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Primeramente, es necesario manifestar que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado de la demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló, que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que, además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a las afiliadas o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber

de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)

2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.
3. La carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

Es así como, en el presente asunto, está probado, que la actora, estando afiliada al régimen publico administrado por el ISS hoy COLPENSIONES, según se observa en el certificado SIAFP que milita a folio 76 del expediente (Documento 08 del expediente digital) se afilió a la administradora del RAIS PROTECCIÓN S.A. el 21 de junio de 1995 como se advierte en el formulario de afiliación a dicho fondo que milita a folio 22 del plenario (Documento 03 del expediente digital).

De otra parte, en este caso, si bien la demandante no es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por no contar para el 1º de abril de 1994 con 35 o más años de edad o 15 años de servicio, ello no es óbice para que PROTECCIÓN S.A en el año 1995 estuviera en la obligación de suministrarle la información clara, completa y oportuna respecto de las ventajas y desventajas de cada régimen pensional; sobre todo **cómo alcanzaría la pensión de vejez y de qué dependería su monto en el RAIS.**

Sobre el deber de información antes citado, escuchado el interrogatorio de parte que fue absuelto por la demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 00:17:42 del video de la audiencia de conciliación y trámite (documento 28 del expediente digital), no se advierte que, esta haya confesado que al momento de su traslado de régimen se le ilustró sobre aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales, como lo son la explicación clara de las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada

uno de ellos, la forma de liquidación de la mesada pensional en cada régimen, la oportunidad de trasladarse entre regímenes y entre administradoras y los términos para ello, entre otros aspectos que resultan necesarios para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.

Ahora, conforme lo señaló el *a quo*, para probar dicha asesoría, no basta la firma del formulario con la inscripción pre impresa sobre que el traslado fue voluntario, sino que se requiere que se pruebe que en realidad esa voluntad obedeció al suministro de una debida asesoría, para acreditar que el traslado se realizó con pleno conocimiento informado, lo cual no probó la AFP, siendo su carga, como ya lo ha establecido la jurisprudencia especializada, por lo que habrá de confirmarse en esta instancia la decisión de el *a quo* de declarar ineficaz el traslado de régimen pensional realizado por la demandante en el año 1995 cuando se trasladó del RPM administrado en ese momento por ISS hoy COLPENSIONES a la AFP PROTECCIÓN S.A.

De otra parte, en lo referente a las **sumas que deben ser devueltas** a COLPENSIONES, encuentra la Sala que la orden impartida por el *a quo*, no ofrece la debida claridad sobre de los dineros a transferir por PROTECCIÓN S.A. a COLPENSIONES, por lo que se precisa en esta instancia, que esta AFP debe devolver a Colpensiones la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro pensional de la actora, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses, así como los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro de Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole, pues al declararse la ineficacia del acto de traslado, **ningún efecto jurídico puede derivarse de este** y por tanto, deben reintegrarse a COLPENSIONES, la totalidad de las sumas que hubiese recibido la AFP demandada como cotización de la demandante, como lo ha señalado de manera reiterada la SCL de la CSJ en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019.

Ha explicado la Corte Suprema de Justicia que las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando la Sala Civil de la alta Corporación que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás»* (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”*.

En este sentido se pronunció igualmente la SCL de la CSJ, sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008 y lo reiteró en sentencias SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019 y SL1688-2019, en la que precisó:

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación dla actora, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

“Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba la actora antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuándo le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.”

Asimismo, contrario a lo manifestado por el apoderado de PROTECCIÓN S.A en su recurso de alzada, al tratarse de la declaratoria de un acto ineficaz que acarrea los mismos efectos de uno nulo, no es dable concebir, so pretexto del principio de la buena fe **o de una buena gestión en la administración del bien**, que dichas sumas queden por fuera de las restituciones, de un lado, porque se trata de rubros que pertenecen al régimen de prima media con prestación definida, y por ello son necesarios para su funcionamiento, y por otro, porque es la indebida actuación por parte de la AFP demandada, al no proveer la información clara, completa y comprensible a través de sus asesores, la que acarrea como consecuencia, además del hecho de generar la declaratoria de ineficacia, que deban asumir con su patrimonio los perjuicios que se ocasionen a los afiliados y las sumas sufragadas a terceros, como lo son las aseguradoras previsionales, ello con base en los artículos 2.2.7.4.1 y 2.2.7.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, que compiló los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

Respecto de la solicitud de la apoderada de COLPENSIONES en los alegatos de esta instancia, en el sentido que se ordena la indexación de las cuotas e administración, se trata de una cuestión que debió plantearse en la contestación de la demanda o cuando menos, en el recurso de apelación, de manera que una decisión en tal sentido implicaría decidir más allá de lo pedido, lo que no resulta improcedente en la sentencias de segunda instancia, pues fue un asunto que las partes no tuvieron la oportunidad de debatir en el proceso, lo que violentaría los derechos de contradicción y defensa de las partes, por lo que no se resolverá sobre este solicitud.

En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por las demandadas al dar respuesta a la demanda, se tiene que, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1689-2019, proferida el 8 de mayo de 2019.

Ahora, respecto de la afirmación en los alegatos de COLPENSIONES, sobre la imposibilidad de traslado de régimen impuesta por el legislador en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 el cual modifico el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, cuando le falten al afiliado menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión de vejez, es palmario que tal prohibición, se aplica en los casos de traslado voluntario, que no es lo que pretende la actora, sino la ineficacia de su afiliación inicial al RAIS.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia consultada será CONFIRMADA y ADICIONADA en los términos anteriormente expuestos.

COSTAS en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. y de COLPENSIONES por haber salido vencidas en el recurso de apelación interpuesto. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000, de la que responde cada una de estas AFP en un cincuenta por ciento.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de octubre de 2021 proferida el JUZGADO VEINTIDOS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **BLANCA LUCÍA RAMÍREZ ALARCÓN** contra **COLPENSIONES** y **PROTECCIÓN S.A.** PRECISANDO que PROTECCIÓN S.A. debe devolver a Colpensiones la totalidad del dinero existente en la cuenta de ahorro pensional de la actora, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses, así como los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro de Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S. A. y COLPENSIONES en favor de la demandante. Las agencias en derecho, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000, de la que responde cada una de estas AFP en un cincuenta por ciento.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez

Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **63af42322fe73f0315722916b774fb879fcfb00120eead30b2004adf3058b103**

Documento generado en 13/04/2023 04:07:15 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>